

Duodécimo.—En todo lo no regulado expresamente en la presente se aplicará, en cuanto proceda, la mencionada Orden de 28 de julio de 1972.

Lo que comunico a V. I. a los efectos oportunos.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 12 de julio de 1976.—P. D., el Subsecretario de Hacienda, Federico Trenor y Trenor.

Ilmo. Sr. Director general de Inspección Tributaria.

18659

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de Divisas de Madrid

Cambios oficiales del día 27 de septiembre de 1976

Divisas convertibles	Cambios	
	Comprador	Vendedor
1 dólar U. S. A. (1)	67,732	67,932
1 dólar canadiense	69,621	69,895
1 franco francés	13,802	13,857
1 libra esterlina	113,992	114,601
1 franco suizo	27,427	27,564
100 francos belgas	177,704	178,697
1 marco alemán	27,415	27,551
100 liras italianas	7,971	8,004
1 florín holandés	26,252	26,381
1 corona sueca	15,685	15,768
1 corona danesa	11,394	11,447
1 corona noruega	12,579	12,639
1 marco finlandés	17,481	17,578
100 chelines austriacos	368,157	369,518
100 escudos portugueses	216,811	218,853
100 yens japoneses	23,527	23,637

(1) Esta cotización será aplicable por el Banco de España a los dólares de cuenta en que se formalice intercambio con los siguientes países: Colombia, Cuba y Guinea Ecuatorial.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

18660

ORDEN de 1 de julio de 1976 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 21 de febrero de 1976, dictada por la Sala Quinta del Tribunal Supremo.

Ilmo Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia, ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo, interpuesto por el Procurador don Francisco Martínez Arenas, en representación de don Luis Alonso Gutiérrez, don Manuel Benedicto González, don Angel Alvarez Valencia y don Raúl Carretero de la Cuerda y defendidos por Letrado, contra resolución de este Ministerio, de 13 de mayo de 1970, que aprueba el Reglamento de la Ciudad Sanitaria Provincial «Francisco Franco», siendo parte coadyuvante la excelentísima Diputación Provincial de Madrid, representada por el Procurador don José Granados Weil y dirigida por Letrado, se ha dictado el 21 de febrero de 1976, sentencia, cuya parte dispositiva dice:

«Fallamos: Que desestimando las causas de inadmisibilidad alegadas y entrando en el fondo del asunto, desestimamos el recurso interpuesto por don Luis Alonso Gutiérrez, don Manuel Gutiérrez Martín, don Manuel Benedicto González, don Angel Alvarez Valencia y don Raúl Carretero de la Cuerda, contra resolución del Ministerio de la Gobernación de trece de mayo de mil novecientos setenta, que aprobó el Reglamento de la Ciudad Sanitaria Provincial «Francisco Franco», de la Diputación Provincial de Madrid, declarando que dicho Reglamento es ajustado a derecho, sin hacer expresa imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa», definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Juan V. Barquero.—Victor Serván.—Antonio Agúndez.—Adolfo Carretero.—Miguel de Páramo (con las rubricas).»

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 y siguientes de la Ley reguladora de

la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que participo a V. I. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 1 de julio de 1976.

FRAGA IRIBARNE

Ilmo. Sr. Director general de Administración Local.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

18661

RESOLUCION de la Dirección General de Obras Hidráulicas por la que se hace pública la autorización a don José Hernández Hernández para continuar labores de alumbramiento de aguas subterráneas en terrenos de dominio público, en el término municipal de Santiago del Teide (Santa Cruz de Tenerife), mediante un tramo de galería de veintiocho alineaciones rectas.

Don José Hernández Hernández ha solicitado autorización para ejecutar en terrenos de dominio público, en el término municipal de Santiago del Teide (Tenerife), continuación de galería para alumbramiento de aguas subterráneas, emboquillada en el paraje conocido por Valle de Tamaino, en dicho término municipal, y

Este Ministerio ha resuelto autorizar a don José Hernández Hernández para continuar las labores de alumbramiento de aguas subterráneas en terrenos de dominio público, en el término municipal de Santiago del Teide (Santa Cruz de Tenerife), mediante un tramo de galería de 28 alineaciones rectas, cuyas longitudes son: 73,80 metros, 71,08, 32,82, 29,62, 33,22, 38,94, 51,79, 24,92, 26,39, 27,93, 21,74, 39,27, 35,20, 40,96, 38,99, 85,40, 53,88, 61,34, 29,57, 23,17, 80,12, 30,67, 53,50, 39,78, 59,75, 300,15, 117,80 y 159,83 metros, y sus rumbos respectivos, expresados en grados centesimales referidos al Norte verdadero, de 34,45, 67,00, 91,47, 66,78, 20,19, 59,72, 48,53, 18,15, 34,44, 16,59, 327,73, 393,82, 27,25, 2,73, 15,73, 384,93, 8,81, 356,43, 331,21, 356,97, 378,80, 395,45, 29,24, 398,69, 11,37, 397,27, 377,45 y 347,18, comenzando el tramo indicado a los 1.772 metros de la bocamina de la galería que tiene autorizada en el expediente, con el número 4.279 del Servicio Hidráulico de Santa Cruz de Tenerife, y emboquillada en el Valle de Tamaino, junto al barranco de Santiago, a la cota de 460 metros sobre el nivel del mar, en aquel término municipal, con arreglo a las siguientes condiciones:

1.ª Las obras de continuación se ejecutarán con arreglo al proyecto suscrito por el Ingeniero de Minas don Manuel L. Leucuna Ribot, en Santa Cruz de Tenerife y junio de 1972, con un presupuesto de ejecución material de 2.913.898,72 pesetas, en tanto no se oponga a las presentes condiciones y autorización, quedando autorizado el Servicio Hidráulico de Santa Cruz de Tenerife, para introducir o aprobar las modificaciones de detalle que tiendan al perfeccionamiento del proyecto y que no afecten a las características esenciales de la autorización, lo cual daría lugar a la tramitación de nuevo expediente.

2.ª El depósito ya constituido del 1 por 100 del presupuesto de las obras en terrenos de dominio público quedará en calidad de fianza definitiva a responder del cumplimiento de estas condiciones, y será devuelto al concesionario una vez aprobada por la superioridad el acta de reconocimiento final de las obras.

3.ª Las obras comenzarán en el plazo de cuatro meses y terminarán en el de cuatro años, contados ambos plazos a partir de la fecha de publicación de esta autorización en el «Boletín Oficial del Estado».

4.ª La inspección y vigilancia de las obras, tanto durante la construcción como de su explotación, quedarán a cargo del Servicio Hidráulico de Santa Cruz de Tenerife, y sus gastos, con arreglo a las disposiciones que le sean aplicables en cada momento, y en especial al Decreto número 140, de 4 de febrero de 1960, serán de cuenta del beneficiario, el cual viene obligado a dar cuenta al expresado Servicio Hidráulico del principio y fin de dichas obras, así como de cuantas incidencias ocurran durante la ejecución, explotación y conservación de las mismas. Terminadas estas obras, se procederá a su reconocimiento, levantándose acta en la que conste el caudal alumbrado, el cumplimiento de las condiciones impuestas y de las disposiciones en vigor que le sean aplicables, debiendo ser aprobada dicha acta por la superioridad.

5.ª Los trabajos se realizarán con arreglo a los buenos principios de la construcción. Los productos de las excavaciones serán depositados en sitio y forma que no perturben los regímenes y cauces de las aguas, ni perjudiquen los intereses de particulares y el beneficiario, bajo su responsabilidad, adoptará las precauciones necesarias para la seguridad de las obras y para evitar accidentes a los trabajadores.

6.ª Cuando en la perforación de un dique aparezca agua en cantidad que impida su aprovechamiento normal, deberá el beneficiario suspender los trabajos, dando inmediatamente cuenta de ello, hasta que se instale un dispositivo capaz de permitir el cierre de dicho dique, resistir el empuje del agua y regularizar su salida, debiendo ser aprobado el proyecto del mismo por el Servicio Hidráulico de Santa Cruz de Tenerife.

7.ª Se concede esta autorización dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero, siendo responsable el beneficiario de los daños y perjuicios que, con motivo de las obras o servicios puedan irrogarse, tanto durante su construcción como de su explotación, y quedando obligado a ejecutar las obras necesarias, para conservar o sustituir las servidumbres existentes.

8.ª Se autoriza la ocupación de los terrenos de dominio público que para la ejecución de las obras considere necesario el Servicio Hidráulico de Santa Cruz de Tenerife.

9.ª Queda sometida esta autorización a las disposiciones en vigor o que se dicten en lo sucesivo relativas a la protección a la industria nacional, contrato de trabajo, Seguridad Social y demás de carácter laboral, administrativo, y a las prescripciones contenidas en el Reglamento de Policía Minera, para la seguridad de los obreros y de los trabajos, y a los artículos 22 y 120 del Reglamento de Armas y Explosivos en cuanto puedan modificar aquél.

10. El beneficiario queda obligado a remitir anualmente al Servicio Hidráulico de Santa Cruz de Tenerife el resultado de dos aforos, realizados de la misma forma por un técnico competente, en épocas de máximo y mínimo caudal, los cuales podrá comprobar dicho Servicio Hidráulico si lo estimasen necesario, siendo los gastos derivados a costa del beneficiario.

11. El Servicio Hidráulico de Santa Cruz de Tenerife podrá intervenir en la ordenación de los trabajos, señalando el ritmo con que han de ejecutarse, pudiendo obligar a la suspensión temporal de los mismos, si así conviniese, para determinar la influencia que éstos y otros que se realicen en la zona puedan tener entre sí.

12. El beneficiario no podrá hacer cesión de la autorización concedida a un tercero, salvo que, previo el trámite reglamentario, sea aprobada por el Ministerio de Obras Públicas.

13. El beneficiario queda obligado a dar cuenta a la Jefatura del Distrito Minero de la provincia de Santa Cruz de Tenerife de la aparición de gases mefíticos en las labores, a fin de poder ésta tomar las medidas de salvaguardia necesarias para la protección del personal obrero. Asimismo deberá presentar a la aprobación de dicha Jefatura las instalaciones de extracción y ventilación y el sistema de perforación, y nombrará a un Facultativo legalmente autorizado para la dirección de los trabajos.

14. El beneficiario queda obligado a respetar las condiciones de la autorización que le ha concedido el Ayuntamiento afectado, para dejar a cubierto los intereses y derechos del pueblo.

15. La Administración se reserva el derecho a tomar del alumbramiento, los volúmenes de aguas necesarios para toda clase de obras públicas, en la forma que estime conveniente, pero sin perjudicar las obras de la autorización.

16. Caducará esta autorización por incumplimiento de cualquiera de las preinsertas condiciones y autorización, así como en los demás casos previstos en las disposiciones vigentes, procediéndose, en tal caso, con arreglo a los trámites señalados en la Ley General de Obras Públicas y Reglamento para su ejecución.

Lo que se hace público en cumplimiento de las disposiciones vigentes.

Madrid, 9 de junio de 1976.—El Director general, P. D., el Comisario central de Aguas, José María Gil Egea.

18662

RESOLUCION de la Dirección General de Transportes Terrestres por la que se hace pública la adjudicación definitiva del servicio público regular de transporte de viajeros, equipajes y encargos por carretera entre Arté y Colonia de San Pedro. (expediente número 7.845).

El ilustrísimo señor Director general de Transportes Terrestres, en uso de las facultades delegadas por Orden ministerial de 18 de mayo de 1959 («Boletín Oficial del Estado» de 5 de junio), con fecha 29 de julio de 1976 ha resuelto adjudicar definitivamente a Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) el servicio público regular de transporte de viajeros, equipajes y encargos por carretera entre Arté y Colonia de San Pedro, provincia de Baleares, como prolongación de la concesión preexistente V-2.228 (expediente número 7.845), con arreglo, entre otras, a las siguientes condiciones:

Itinerario: El itinerario entre Arté y Colonia de San Pedro, de 15 kilómetros, se realizará sin paradas fijas intermedias.

Expediciones: Una diaria de ida y vuelta, de 15 de septiembre hasta el 15 de junio; dos diarias de ida y vuelta, del 16 de junio hasta el 14 de septiembre.

Horario: Se fijará de acuerdo con las conveniencias del interés público, previa aprobación de la Jefatura Regional de Transportes Terrestres.

Vehículos adscritos a la concesión: Los mismos del servicio base V-2.228 más uno con capacidad mínima para transportar 24 viajeros sentados.

Tarifas: Las mismas del servicio base V-2.228. Sobre las tarifas de viajero kilómetro, incrementadas con el canon de coincidencia, se percibirá del usuario el Seguro Obligatorio de Viajeros.

Clasificación del servicio respecto del ferrocarril: Coincidente b) en conjunto con el servicio base V-2.228. En virtud de lo dispuesto en la Orden ministerial de 31 de julio de 1953, el concesionario deberá abonar al ferrocarril el canon de coincidencia que corresponda.

Madrid, 29 de julio de 1976.—El Director general, Juan Antonio Guitart y de Gregorio.—7.112-A.

18663

RESOLUCION de la Dirección General de Transportes Terrestres por la que se hace pública la concesión del telesquí «La Rata», en Port del Comte (Lérida).

El excelentísimo señor Ministro de este Departamento, con fecha 19 de julio de 1976, ha resuelto otorgar definitivamente a «Port del Comte, S. A.», la concesión del telesquí «La Rata», en Port del Comte (Lérida), con arreglo a la Ley y Reglamento de Teleféricos vigentes, pliego de condiciones técnicas de 23 de junio de 1966 y condiciones particulares de la concesión, entre las que figuran las siguientes:

A) Plazo: La duración mínima de la concesión será de veinticinco años.

B) Tarifa: Tendrá el carácter de máxima y será de 40 pesetas por viaje.

C) Zona de influencia: Será la señalada en el plano que consta en el expediente de 41 hectáreas 20 áreas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el artículo 15 del Reglamento de Teleféricos, aprobado por Decreto 673/1966, de 10 de marzo.

Madrid, 20 de agosto de 1976.—El Director general, Juan Antonio Guitart y de Gregorio.—7.095-A.

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA

18664

ORDEN de 4 de junio de 1976 por la que se declara lesivo para el interés público el acuerdo adoptado por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Lugo sobre justiprecio de un local de negocio adosado a la muralla romana.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de que se hará mérito;

Resultando que por Decretos 1923/1971, de 8 de julio, («Boletín Oficial del Estado» de 15 de agosto), y 2236/1971, de 13 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 23 de septiembre), se declaró, respectivamente, la utilidad pública a efectos de expropiación forzosa y la urgencia de la ocupación de los inmuebles adosados a la muralla romana de la ciudad de Lugo, incluida en el Catálogo de Monumentos Históricos-Artísticos; figurando entre los afectados por dichos Decretos don Angel Cuba Santomé, como titular del local de negocio y derecho de arrendamiento de un taller de ajuste, calderería y soldadura autógena instalado en la casa número 35 de la ronda de los Caídos de la ciudad de Lugo;

Resultando que levantada el acta previa de ocupación y habiéndose hecho pago de la cantidad fijada como indemnización por el carácter de urgencia del expediente expropiatorio, y ocupada la finca en cuestión, se procedió a formar la oportuna pieza separada de justiprecio en cuanto al local de negocio indicado, por no haberse podido llegar a un acuerdo amistoso entre la Administración y el expropiado; en cuya pieza, el Perito de la Administración valoró los expresados derechos en ochocientas noventa y tres mil quinientas cincuenta y dos (893.552) pesetas; en tanto que el expropiado los estimó en cuatro millones seiscientas cincuenta y dos mil quinientas cincuenta (4.652.550) pesetas;

Resultando que remitidas las actuaciones al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Lugo, este Organismo, en la sesión celebrada el día 30 de mayo de 1975, dictó acuerdo, por virtud del cual fijó el justiprecio de los derechos en cuestión en la cantidad de un millón seiscientas veintisiete mil quinientas (1.627.500) pesetas, más el interés legal del 4 por 100 de dicha total cantidad desde la fecha siguiente al día de la ocupación hasta aquella en que tenga lugar el pago del justiprecio;

Resultando que la notable desproporción existente entre la valoración de la Administración y la señalada por el Jurado Provincial de Expropiación pone de manifiesto una lesión eco-